

La democracia, base de la lucha contra la pobreza

Jorge Alonso

Publicado en: *Alternativas Sur*, vol. I, num. 1, 2002, pp.
51-67.

El Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial) es un espacio de reflexión que analiza los retos de la sostenibilidad, la cohesión social, la calidad de la democracia y la paz en la sociedad actual, desde una perspectiva crítica y transdisciplinar.

Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial)

C/ Duque de Sesto 40, 28009 Madrid

Tel.: 91 576 32 99 – Fax: 91 577 47 26 – cip@fuhem.es – www.cip.fuhem.es

La democracia, base de la lucha contra la pobreza¹

Jorge Alonso*

La vinculación entre democracia y economía es un tema decisivo en América Latina. No basta con la democracia electoral. Hay que democratizar el mercado. Se trata de una lucha llena de espacios. La democracia liberal no sabe ni puede enfrentar con éxito las demandas de ciudadanos pensantes en una sociedad globalizada.

La nueva etapa del capitalismo ha acrecentado el empobrecimiento en proporciones geométricas. Se proclama que se trata de un proceso natural, cuando se sabe que obedece a planes y proyectos del capital financiero, que ha intentado paliar el desastre con programas mundiales de lucha contra la pobreza incapaces de resolver el problema generado por las políticas económicas dominantes. En esta situación, se han abierto espacios para la acción de grupos organizados de la sociedad civil que plantean alternativas de base ante la creciente pauperización. Pero ese combate no podrá emprenderse con seriedad sin una auténtica democracia política y social.

El estado de la pobreza

Las prácticas surgidas del neoliberalismo producen una creciente pobreza. Estructuralmente, el neoliberalismo no es capaz de remediarla porque este modelo económico concentra la riqueza en unas pocas manos y agrava la situación de falta de oportunidades para la mayoría. Al propugnar como lo principal la obtención de beneficios y relegar a un segundo plano el bienestar de la humanidad, el neoliberalismo legitima un orden económico en el cual unos pocos se enriquecen a manos llenas y sumen en la pobreza a la mayoría de hombres y de mujeres. Especialmente a las mujeres. A las de los sectores populares se les llama “las administradoras de la pobreza”. Se estima que un 70% de los 1.300 millones de personas en situación de pobreza son mujeres. Es desgarradora su segregación, discriminación y exclusión. El neoliberalismo también ha incrementado el número de los “niños de la calle”.

El actual es un modelo de desarrollo depredador que perjudica al medio ambiente. Como reconoció el titular de la Organización de Naciones Unidas para el

¹ Este artículo se publicó en *Envío* (Nicaragua), N° 198, septiembre de 1998, pp. 43-53.

* Investigador del Centro de Investigación y Estudios sobre Antropología Social (CIESAS) Occidente, México.

Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) en 1996, la fórmula neoliberal aplicada al pie de la letra ha tenido consecuencias sociales negativas. Más allá de un problema de ingresos, la pobreza que este modelo produce es un síntoma de profundos desequilibrios estructurales, que se manifiestan en todos los ámbitos del quehacer humano. Esta pobreza priva al ser humano de los elementos esenciales para que viva y se desarrolle con dignidad física, mental y espiritual.

Hay quienes, invocando las teorías de Malthus, sostienen que la creciente pobreza tiene sus raíces en el ritmo desigual de crecimiento de la población y de los medios de subsistencia: mientras la población aumenta en progresión geométrica, los medios para subsistir crecen en progresión aritmética y así, nunca habrá recursos suficientes para combatir la pobreza. Frente a esta visión —que plantea únicamente medidas de control natal—, otros argumentan que la pobreza es el resultado de lógicas excluyentes y que existe el deber de remediarla.

La pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional. Sus principales causas son la acumulación y distribución desigual de la riqueza y el consumismo. Ambas realidades destruyen derechos, identidades y vidas y colocan a las personas en una posición apta para su dominación económica, política y social. El administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló en 1997 que la pobreza extrema podría eliminarse en el plazo de una generación si existiera un compromiso serio. Calculó que bastaría con dedicar a ese empeño el 1% de los ingresos mundiales en los próximos veinte años.

Millones de personas entre paréntesis

El neoliberalismo ha provocado sufrimientos no cuantificables. El catálogo de males, horrores y miserias es largo. Se ha alentado un capital financiero que, buscando ganancias a toda costa, no estimula la producción. Se incrementa el capital sin necesidad de que se invierta en la industria. Los grandes grupos económicos internacionales actúan en mercados salvajes. Aumenta el desastre ecológico. La capacidad de los Estados para velar por el bienestar de sus ciudadanos ha sido severamente perjudicada. Se reducen los servicios de bienestar (o, mejor dicho, de menos malestar) y proliferan el desempleo, la inseguridad personal, la desigualdad y los problemas sociales. Se modifican las relaciones de trabajo y la estructura del empleo. Se articulan formas de sobreexplotación local con redes productivas modernas. Crimen, drogas, racismo, xenofobia, violencia, adoptan grandes proporciones.

La globalización ha minimizado el papel de lo político y acrecentado el del mercado. Se ha reducido la política a la técnica y la economía al crecimiento. La competitividad global es cada vez más áspera y, con la apertura de fronteras a los mercados, sobreviene el predominio de los flujos financieros mundiales sobre los capitalismos nacionales. Medran los negociantes de la dependencia asociada (movimientos de capital-cadenas de producción y unidades-gestión). Los gobernantes se encuentran bajo el imperio de los mercados financieros. Los grandes centros financieros mundiales imponen a los países pobres ajustes estructurales que, además de desempleo y bajos salarios, provocan una aguda desnutrición y el surgimiento de enfermedades que, siendo curables, se cobran muchas vidas. La fuga de capitales y la corrupción

incrementan la pobreza de los países del Sur. Más de la mitad de sus deudas se encuentran depositadas en cuentas particulares en paraísos fiscales.

Crece las comunicaciones, pero hay desposesión del saber y vulgarización mediática. La corrupción no se controla. La globalización ha ido destruyendo a los más destacados actores sociales de la anterior sociedad industrial. Se ha puesto a millones de personas entre paréntesis: la marginación es despiadada, hay infrautilización de recursos, se condena a la mayoría de los jóvenes a no poder ser productivos, hay destrucción de derechos sociales, se olvida el gasto social o se lo condena. Se pretende que la población se acostumbre a la existencia de excluidos. Se quisiera que las enormes masas de desposeídos acabaran unas con otras con una violencia incontrolable acentuada por la discriminación y una anomia desatada. La inseguridad niega el ejercicio de la ciudadanía. Las elites controlan el dinero, la información, el debate. Las decisiones no se toman en las instancias democráticas.

No se ha acabado la lucha de clases

La globalización aparece como incapaz de generar equidad. El poder y la riqueza se organizan en redes globales por las que circulan flujos de poder —de comunicación, financieros...— que son asimétricos, y esta sociedad de flujos escapa a regulaciones. Mientras la riqueza mundial sigue aumentando, las disparidades entre los países y en el interior de ellos alcanza dimensiones sin precedentes. El neoliberalismo debilita la ciudadanía y la verdadera solidaridad y desestructura el bien común. Aunque pierda la sociedad, privilegia al mercado. No cuenta el hombre, sino la rentabilidad. Fomenta el darwinismo social.

Los datos mundiales sobre pobreza y desigualdad son apabullantes. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo informó en 1996 que más de la mitad de la población mundial tenía ingresos inferiores a dos dólares diarios. Mientras el 20% de los pobres percibía en 1980 el 2,3% de la renta mundial, trece años después esa proporción había bajado al 1,4%. En cambio, el 20% de los más ricos se había quedado en 1980 con el 70% de la renta mundial y trece años más tarde ya acaparaba el 85%. Entre tanto, 840 millones de personas pasan hambre, mil millones no tienen acceso a agua potable y la misma cantidad son analfabetas. La esperanza de vida de un tercio de la población en los países menos desarrollados no llega a los cuarenta años de vida. Por infecciones curables mueren anualmente 17 millones de personas, la mayoría de ellas niños, y también por enfermedades relacionadas con el hambre.

La riqueza neta de los diez billonarios más ricos del mundo equivale a 1,5 veces los ingresos de los países menos desarrollados. En América Latina, casi una cuarta parte de la población vive con menos de un dólar al día y el 10% más rico tiene 84 veces más recursos que el 10% más pobre. El Banco Mundial aseguró en 1998 que las medidas económicas aplicadas en América Latina no habían sido suficientes para disminuir la pobreza. Pero la pobreza no es prerrogativa de los países atrasados: en el país más rico, Estados Unidos, un 20% de la población es pobre. En las naciones desarrolladas existen más de cien millones de personas que viven con menos del 50% de los ingresos medios disponibles por individuo. Otros 37 millones están desocupados y más de cinco millones no tienen techo bajo el cual vivir.

Esta realidad aterradora ha llevado a los responsables de las políticas neoliberales a diseñar políticas de atención a la extrema pobreza que son, más bien, paliativos para evitar estallidos sociales. Se recomienda atención a los grupos de “alta vulnerabilidad”. El neoliberalismo propone pasar de un Estado “benefactor” a una sociedad benefactora: no se responde a derechos y se emplea una selectividad que atenta contra la universalidad de las políticas sociales. Las consignas de globalización y flexibilidad se repiten como una letanía. Los neoliberales son dogmáticos; defienden un individualismo agresivo y disfrazan de ciencia su ideología. Se trata de un dogmatismo conservador, de un discurso impositivo, de un fatalismo económico. Se hunde el Estado social y se quiere un Estado policial. Se trata de convencer a la gente de que no puede hacer nada en contra de los mercados. El neoliberalismo impide pensar lógicamente.

Pero las manifestaciones de la pobreza no puede ser controladas sólo con las políticas que proponen los ideólogos del neoliberalismo, que fomentan exclusivamente el crecimiento económico. Y, si bien es cierto que el Estado de bienestar fue incapaz de cumplir sus metas, las soluciones neoliberales son aún menos aptas para remediar de raíz la pobreza. “Los discursos neoliberales, llenos de modernidad, no tienen la fuerza suficiente para acabar con las clases sociales y decretar la inexistencia de intereses diferentes entre ellas, como no tienen fuerza para acabar con los conflictos y las luchas entre las clases”, dijo Paulo Freire en 1993 en su libro *Pedagogía de la esperanza*. Porque existe una lucha constante entre los que tratan de imponer la dominación y los que la resisten.

Las soluciones propuestas

Banco Mundial: macroeconomía sana y educación

En los programas de lucha contra la pobreza se han delineado principalmente tres tendencias: la de los organismos financieros internacionales dirigidos por el Banco Mundial, la del PNUD y la de las ONG.

El Banco Mundial intenta complementar con programas de lucha contra la pobreza sus políticas de ajuste estructural. Las medidas que ha impuesto han enfatizado el crecimiento económico con programas de asistencia. En lugar de analizar cómo sus planes han incrementado la pobreza, el Banco Mundial argumenta que la evolución de ésta se debe, precisamente, a que no se han seguido sus directrices y reconoce que, en la reducción de la pobreza, muy poco se ha podido lograr. Plantea que, en la discusión sobre cómo salir de la pobreza, existen muchas tesis, pero subraya que hay dos elementos clave en torno a los cuales se da una casi total unanimidad: la necesidad de una política macroeconómica sana y de una rápida elevación del nivel de educación.

En esta misma línea, la UNCTAD ha enfatizado que en el futuro próximo la diferencia entre pobres y ricos, a nivel de individuos y de naciones, la determinará el nivel de educación.

El Banco Interamericano de Desarrollo se ha sumado a estos análisis y ha declarado que la falta de una educación adecuada ha sido el factor aislado más importante para explicar la persistencia de la desigualdad y el aumento de la pobreza en América Latina. Recomienda que, si se quiere reducir la pobreza, se mejore la cali-

dad de la educación básica. El Banco Mundial propone, además de proveer servicios básicos a los pobres, promover un mejor uso productivo de su mano de obra. El desempleo y el subempleo serían los problemas más importantes a revertir. En este mismo sentido van también las orientaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que privilegian la inversión en recursos humanos y buscan la convergencia de la política económica y la social.

PNUD: el potencial de los pobres

El PNUD, aceptando que el mayor desafío para el planeta es suprimir la pobreza para asegurar el futuro, plantea desarrollar la capacidad de un crecimiento sostenido con equidad. Esto implica la reactivación económica, el incremento de los salarios, el apoyo a la economía popular y el desarrollo de un estilo participativo, flexible y adaptativo.

Es de destacar el papel del PNUD en la mitigación de la pobreza con participación comunitaria. El PNUD ha planteado que el mayor potencial estratégico del siglo XXI no es el oro ni la tierra ni las acciones de la bolsa, sino los 2.300 millones de subeducados, desnutridos y desempleados. Ha recordado que la eliminación de la pobreza en el mundo fue un compromiso de los Gobiernos en la Cumbre de Copenhague y que ese compromiso implica un imperativo ético, social, político y económico de la humanidad. Propone sustituir el enfoque paliativo por el desarrollo de capacidades. De esta forma, privilegia una estrategia centrada en el desarrollo humano sostenible, en la movilización social y en la potenciación de las personas en situación de pobreza. En sus planteamientos hay una crítica a la visión de que el crecimiento económico conduce automáticamente a la superación de la pobreza.

El PNUD no sólo ve entre los pobres el potencial de su mano de obra, sino que defiende que el crecimiento económico y el desarrollo humano van entrelazados. Anota que el desarrollo social no se logrará simplemente mediante la libre interacción de las fuerzas del mercado y plantea que debe haber políticas oficiales que corrijan las fallas de los mercados. No descarga a los Gobiernos de la responsabilidad principal de la eliminación de la pobreza. Insiste en la expansión del acceso de las familias pobres a los servicios sociales, a la formación profesional y a la tecnología, al crédito, la tierra y los recursos naturales, al empleo productivo y a la mejora del ingreso, así como al ejercicio de sus libertades fundamentales, la seguridad pública, el pluralismo y la diversidad cultural. El PNUD tiene en cuenta las desigualdades de género. Demanda el uso eficiente de los recursos y propone la protección y regeneración del ambiente. Ha hecho ver la necesidad de buscar mecanismos no convencionales de crédito para apoyar la producción y ofrece apoyo al desarrollo de las capacidades de los países, en especial a los que viven procesos de transición política-económica. Está a favor del diálogo, de la concertación y de la búsqueda de soluciones consensuadas entre el Gobierno y la sociedad civil.

Las ONG: vivir de otra manera

Las organizaciones no gubernamentales comparten la convicción de la necesidad de eliminar la pobreza y el hambre, del logro de una mayor igualdad en la distribución de

los ingresos y del desarrollo de los recursos humanos. Están de acuerdo con la creación de puestos de trabajo, con la conjunción de esfuerzos de la actividad pública y privada en una estrategia productiva, con la provisión de servicios básicos (educación, salud, agua potable) a los sectores con menores recursos, con la descentralización de los programas sociales, con el mejoramiento de la eficiencia del gasto social, con el compromiso de la población en la ejecución de la política social, con el ejercicio transparente del gasto social —muchas veces utilizado para beneficio político de los gobernantes— y recuerdan el cuidado que se debe tener para evitar el clientelismo que puede generar este gasto social. Subrayan la sostenibilidad ambiental y plantean que el logro de la superación de la pobreza no puede estar basado en el sacrificio de las oportunidades de desarrollo de las generaciones futuras. Han defendido que la administración sostenible de los recursos tiene que conservarlos y protegerlos porque, de lo contrario, esto redundaría en el aumento de la pobreza. La meta a alcanzar es que todos tengan medios de subsistencia sostenibles y que se rehabiliten los recursos degradados. Los planteamientos de las ONG en la lucha contra la pobreza han entrado en análisis y propuestas alternativas de modelos económicos, que destacan tanto un comercio y un desarrollo sostenible como nuevas formas de consumo y de estilos de vida.

Las ONG critican la ideología neoliberal, que ve las relaciones sociales como variables económicas. Se oponen al modelo económico concentrador de riquezas para el que la expansión es una finalidad en sí misma y plantean que los indicadores sociales y económicos no deben considerar solamente el crecimiento material y el progreso tecnológico, sino también el bienestar individual, social y ambiental. Han destacado que el propósito fundamental de la organización económica es satisfacer las necesidades básicas de la comunidad: alimentación, habitación, salud, educación y cultura. Llamam la atención sobre el hecho de que una alternativa al sistema dominante debe inspirarse en los modelos autóctonos y en comunidades de base que valoricen a las personas. Defienden el papel central de la mujer. Ponen como objetivo alcanzar un máximo de felicidad con un mínimo de recursos y ningún desperdicio. En este modelo alternativo, el Estado deberá dejar de ser un instrumento al servicio de las grandes compañías para orientarse prioritariamente a satisfacer las necesidades de las personas y hacia estrategias de desarrollo que interesen a las comunidades. Las ONG plantean la necesidad de anular la deuda internacional y dismantelar el sistema injusto en que está basada: argumentan que la deuda externa se ha convertido en un instrumento de explotación de los pueblos y de dominación política, utilizado como mecanismo de presión de los países acreedores para imponer la liberalización de sus economías a los países deudores. Afirman que es necesario incorporar una nueva legislación para evitar las fugas de capitales y la evasión de impuestos. Convocan a instituciones culturales, profesionales y religiosas a discutir la cuestión ética de la deuda y de los programas de ajuste, y subrayan que se debe compensar la deuda ecológica que el Norte ha contraído con el Sur.

Están en contra de las distorsiones causadas por las políticas comerciales imperantes. Aceptan mecanismos multilaterales, pero siempre que sean abiertos y equilibrados. Piden el dismantelamiento de todas las injustas medidas proteccionistas impuestas por el Norte. Se oponen a las adversas condiciones ligadas a los programas de ajuste. Exigen la reglamentación democrática de la conducción de las compañías

internacionales. Llamam a buscar políticas justas que se traduzcan en mejoría de los niveles sociales. Reclaman el derecho de los pueblos al acceso a toda información científica. Se oponen a los gastos militares. Plantean la urgencia de una redistribución internacional y nacional del ingreso, de la riqueza y del acceso a los recursos. Consideran que debe hacerse ver que la calidad de vida se sustenta en el desarrollo de relaciones humanas creadoras. Desde esa óptica, proponen la reestructuración de los sistemas macroeconómicos con el fin de incluir costes sociales y ecológicos en todos los bienes y servicios. Plantean que todas las personas tienen derecho a porciones equitativas de agua, alimento, aire, tierra y otros recursos dentro de la capacidad sostenible de la Tierra. Proponen una producción de bienes que debería llevarse a acabo en ciclos cerrados e insisten en que hay que reducir, reutilizar y reciclar.

Las ONG tienen plena conciencia de que nada de esto será posible sin una nueva democracia que se abra a la plena participación y a la consolidación de una ciudadanía a nivel mundial. La pobreza representa el principal factor de inestabilidad política. Las desigualdades sociales son el resultado del acceso desigual a los recursos y de la exclusión del pueblo en la toma de decisiones políticas. La pobreza no existe por falta de recursos, sino por falta de voluntad política para erradicarla. Para poder construir un mundo democrático, basado en la justicia social y en el equilibrio ecológico, la pobreza tiene que ser enfrentada con cambios sustanciales en las estructuras políticas. No se la combatirá sin movilización popular, sin intercambio horizontal y democrático de información, sin discusión y toma de decisiones conjuntas. Los procesos de decisión deben democratizarse. Los sectores de la sociedad más afectados por la pobreza tienen que adquirir poder. Las estrategias tienen que ser elaboradas a partir de las bases para que los individuos y las comunidades puedan tomar decisiones sobre los problemas que les interesan directamente. Los procesos decisivos deberán depender de una democracia deliberativa, dialogal, participativa.

El proyecto democrático

El proyecto democrático no se agota en las reglas de juego de las instituciones políticas, en los métodos para formar un Gobierno. La democratización remite a la misma condición de la sociedad civil. Tiene que ver con un modo de vida, con un mundo cotidiano de relaciones. La democracia formal tiene que combinarse con la democracia social. Ni siquiera la democracia formal podría consolidarse en un cuadro de miseria generalizada como el que afecta a las democracias de América Latina, que carcome hoy la ciudadanía de las mayorías nacionales, precisamente cuando más se ensalza su emancipación política. Cuando los pobres se transforman en indigentes y los ricos en magnates, sucumben la libertad y la democracia. La democracia pelagra, tanto en su concepción como en su método, cuando las masas no tienen acceso a la salud y a la educación y se encuentran en una sociedad paralizada por una economía de penuria. La democracia implica tanto el control de la gestión estatal como una regulación que permita la plena participación de las mayorías en unas condiciones de vida que les permitan ejercer ese derecho. La democracia tiene que ver con la liberación de individuos y grupos del control agobiante de las elites que hablan en nombre del pueblo y de la nación.

Con una concepción así de la democracia se podrán también ir generando relaciones fundadas en la igualdad entre las naciones. Las instituciones multilaterales deben ser configuradas de manera democrática y, para ello, se necesita una potente movilización de la sociedad civil. ONG, movimientos sociales y organizaciones populares pueden construir convergencias para que, en la democracia electoral, se utilice el voto a favor de opciones que favorezcan los intereses generales. Sabedoras de este riesgo, las instancias que comandan las políticas neoliberales han ido atando a los Gobiernos para que las políticas que imponen prevalezcan, aun en caso de alternancia en el gobierno. Pero la fuerza de una convergencia popular podría empujar hacia políticas verdaderamente alternativas.

Lo electoral es importante, pero no basta para asegurar esta orientación. Se requiere transparencia en el ejercicio del poder, que se rindan cuentas y que los ciudadanos puedan incidir en todos los niveles de las decisiones. Las ONG han propuesto que se trabaje para construir instituciones democráticas a nivel subregional, nacional e internacional, independientes del Estado, investidas del poder de fiscalizar, regular y sancionar a los agentes económicos globales y a sus transacciones. Trabajan para que haya instituciones transparentes, democráticas y ecológicamente responsables en todos los niveles. Deben buscarse formas de participación en la toma de decisiones que garanticen la equidad económica, la de género y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Hay que dar lugar a grupos vulnerables, como los niños, los ancianos, los discapacitados, los pueblos indígenas, los migrantes y las minorías étnicas. Se debe hacer énfasis en el otorgamiento de poder a las mujeres para que puedan participar en los procesos de toma de decisiones. Cada grupo tiene que ir definiendo de forma conjunta sus necesidades y la manera de articularse con los demás.

Esta lucha se enfrentará con viejas y nuevas formas de autoritarismo, de burocratismo, de oportunismo y de clientelismo. Al control de unos pocos se va a oponer la determinación de los más. Las autonomías juegan en esto un papel fundamental. Su vinculación tendrá que editar nuevas formas federadas. El papel del municipio también resulta relevante en esta dinámica; habría que modernizarlo, en un contexto de democratización, para que asuma las capacidades que debe desarrollar y ejerza un papel motivador y estimulador del crecimiento de la comunidad. Esto lo llevará a nuevas funciones, nuevas áreas y nuevas tareas. La democratización dinamizará acciones y actividades y movilizará para la atracción de recursos. La democracia será sólida si hay fortaleza en la sociedad civil de las comunidades territoriales.

La democratización del mercado

Los planteamientos de las ONG, como los emanados de personalidades de centro-izquierda, han enfatizado que la pobreza se combate esencialmente con democracia. Umberto Rainieri ha destacado que el tema principal, en América Latina, es vincular más y más la economía y la democracia. Durante año y medio, un grupo de políticos latinoamericanos se reunió para discutir sobre alternativas. Llegaron a la conclusión de que tanto el fundamentalismo de mercado imperante como el desarrollismo proteccionista y populista de antaño resultan ya inoperantes. Se pronunciaron por supe-

rar las políticas neoliberales y señalaron que el neoliberalismo había extraído al mercado de su condición de instrumento y lo había elevado a un *status* de religión. Afirmaron que el neoliberalismo, como vertiente extrema de la economía de mercado, había fracasado en su intento de generar crecimiento y desarrollo y que, en particular, fracasó frente al desafío de lograr una distribución más justa del ingreso y la riqueza, profundizando el empobrecimiento de vastos sectores de la población.

Aclararon que no querían sólo intentar humanizar el neoliberalismo sino adoptar un enfoque alternativo, que consistía, precisamente, en democratizar la economía de mercado. No buscaban regresar al nacionalismo populista ni a la estrategia de sustitución de importaciones, que terminaba protegiendo la ineficacia de los oligopolios autóctonos, ni tampoco querían volver a las finanzas públicas inflacionarias. No defendían el Estado que tenemos o que tuvimos sino un Estado fuerte y democratizado. Proponían democratizar la economía de mercado y volver a una democracia capaz de enfrentar la desigualdad. Estaban de acuerdo en que el mercado fuera el principal asignador de recursos y que, en contrapartida, creara condiciones para que las necesidades de los más pobres pudieran convertirse en demandas solventes para ser procesadas por el propio Estado. Enfatizaron que no estaban proponiendo una tercera vía —porque ya no hay una segunda vía— sino que se pronunciaban por una alternativa democratizadora al camino falsamente proclamado como único.

Además de un diagnóstico en el que concordaban con muchos de los puntos ya planteados por las ONG, agruparon sus propuestas en distintos capítulos referentes a un Estado democrático con fortaleza económica, al enfrentamiento de la desigualdad ofreciendo verdaderas oportunidades para todos, a la búsqueda de una estabilidad sostenible y enriquecida. Para evitar confusiones rechazaron una democracia dosificada: no bastará con el respeto al sufragio popular; hay que disminuir la influencia del dinero en la política. Los medios de comunicación social tendrán que abrirse a la sociedad. El binomio tendrá que ser sociedad fortalecida-gobierno transparente. Una cuestión fundamental es el hecho de que los ciudadanos latinoamericanos puedan conocer sus derechos y defenderlos. Esto requiere multiplicar instrumentos prácticos.

Los políticos de centro-izquierda que se pronunciaron en este documento de alternativa asocian una propuesta productivista a una redistributiva; conjugan la profundización de la democracia con la superación del dualismo social y económico; intentan combinar un Estado fuerte, actuante y refinanciado con el apoyo descentralizado a las pequeñas y medianas empresas. Pretenden sentar las bases de una política popular de alta intensidad y democratizar radicalmente la economía de mercado. Son conscientes de que se tiene que pasar por una secuencia gradual, pero afirman que ésta debe ser acumulativa en los cambios de las instituciones económicas, políticas y sociales. Repiten que no pretenden la humanización de lo inevitable, sino que llaman a construir una alternativa posible y necesaria a un destino que no merecen los pueblos latinoamericanos. Jorge Castañeda y Roberto Mangabeira fueron quienes convocaron esta iniciativa. En *The Economist*, el 17 de enero de 1998, apareció un artículo que aludía al documento elaborado por los convocados, titulado “Alternativa latinoamericana”. La revista mexicana *Nexos* (Nº 243, marzo de 1998) publicó el documento completo con el título “Después del neoliberalismo: un nuevo camino”.

La redistribución: el problema es político

Hay tesis que enfatizan que democracia y pobreza no son compatibles, que en los países pobres la democratización es poco probable y que la democracia es más estable en países que reducen la desigualdad económica. Aunque estas tesis también precisan que la pobreza no es inevitable, se colocaría a los pobres en condiciones de no poder acceder a la democratización. Las encuestas revelan que los sectores más pobres y menos educados son presa fácil de Gobiernos autoritarios. La democracia no vendrá nunca como regalo de las elites: se necesita presión desde abajo. Entre los depauperados se encuentran ya minorías activas y organizadas, que han estado planteando alternativas a los modelos generadores de pobreza. Forman coaliciones en el nivel local, nacional e internacional para intercambiar experiencias, informaciones, recursos, para desarrollar estrategias, campañas y políticas conjuntas que enfrentan la pobreza con propuestas significativas de cambios en los modelos de desarrollo, en las relaciones internacionales, partiendo desde las estructuras políticas locales, mejorando modos de vida y transfiriendo poder a las comunidades. Contra la sumisión, erigen el derecho a elegir.

La democratización debe apoyarse en los ciudadanos e implica una constante conquista de espacios independientes y abrir el debate a todos. Si la combinación de capitalismo y democracia liberal ofrece escasos medios para generar solidaridad social, las dinámicas de transición y consolidación democrática requieren una sociedad civil organizada, una arena política donde grupos autoorganizados, movimientos e individuos relativamente autónomos con respecto al Estado intenten articular valores y crear solidaridades. La pobreza sólo se puede enfrentar por medio de una democracia radical. A través de ella, los ciudadanos construyen espacios para incidir en las políticas públicas y en los debates relativos a todos los dominios de la vida social. Sólo a través de prácticas democráticas es posible lograr medidas de redistribución de la riqueza, ya que esa redistribución no es sólo un problema económico sino un problema político. La democracia radical produce formas emancipadas de vida consensuada por los ciudadanos. El poder comunicativo de los ciudadanos puede cercar el poder burocrático de los funcionarios.

La masa crítica para el cambio

El futuro de la democracia está en la democratización del sistema internacional. Como se ha ido desposeyendo a los ciudadanos de las grandes decisiones políticas, se les han ido atrofiando sus competencias y se ha ido degradando el civismo. Como se ha ido fragmentando la política en varios dominios y la posibilidad de concebirlas juntos, se ha querido que la política desaparezca. La alternativa tiene que afincarse en una sociedad construida por una comunidad de ciudadanos activos que enfrenten esos obstáculos. Siguiendo el ejemplo de Antígona, deben erigirse en contra de las razones de Estado y desatar un proceso de integración de los excluidos. La democratización no erradica los conflictos, sino que los hace abiertos y negociables. Hoy, al haberse internacionalizado los conflictos, se tienen que buscar mecanismos para una democracia a escala planetaria. Un gran apoyo para esta meta se encuentra en las resistencias exis-

tentes al sufrimiento que engendra el neoliberalismo. Una tarea imprescindible es acabar con las mitologías neoliberales y deslegitimar la retórica imperante.

No todo lo planteado es una aspiración por alcanzar. Hay ya algunos logros. Existen comunidades con organizaciones populares que han ido creando estructuras locales alternativas para alcanzar la administración y el control de algunos procesos socioeconómicos. Se han constituido movimientos sociales y comunidades populares que han creado comités de evaluación de proyectos concretos.

La globalización no sólo ha sometido a muchos a los designios de los pocos grandes grupos financieros, sino que también ha dado a muchos la posibilidad de una internacionalización de redes de ONG y de movimientos sociales articulados a nivel mundial. La comunicación de éxitos y fracasos, de problemas y luchas, ha ido generando una solidaridad globalizada. La sociedad civil movilizadora ha ido conquistando no el gran poder, sino espacios que ponen en jaque al gran poder a través de poderes difusos instalados en varias trincheras de la sociedad. La diversidad institucional ha ido propiciando el examen de una gran variedad de programas sociales, políticos y culturales.

Se ha visto que hay alternativas. Pero, hoy como siempre, cualquier cambio a emprender tiene muchos enemigos. Los primeros, quienes medraban con la situación anterior y quisieran perpetuarla. No es fácil conseguir el cambio y a veces parece que el nuevo desorden mundial seguirá estando comandado por las directrices del neoliberalismo. Pero el cambio posible no es pura ilusión. Si hay mayorías pasivas, existen minorías opositoras. Mientras exista una masa crítica de ciudadanos, no solamente capaces de acciones altruistas sino del ejercicio de la razón crítica, el cambio todavía será posible. La sola democracia liberal no está bien preparada para hacer frente a las demandas de ciudadanos reflexivos en un mundo universalizador. Las fórmulas clásicas de integración de la sociedad, del Estado y de la nación han entrado en crisis.

Ésta es una sociedad globalizada. Los mensajes y las tecnologías se encuentran por todas partes. Se está constituyendo otra lógica espacial, característica de los procesos nuevos de acumulación de capital, de organización de la producción, de integración de los mercados, de comunicación de mensajes y del ejercicio de un poder planetario. El espacio de los flujos está globalmente integrado.

La lucha por la ciudadanía

En este contexto, y pese a su dificultad, hay ya indicadores mundiales de la construcción de una nueva ciudadanía. No hay que olvidar que la primera irrupción del reclamo de ciudadanía se inscribió en las luchas que, ante la desigualdad de hecho, exigían la igualdad de derecho. Y que la igualdad de derecho no acabó con la desigualdad de los individuos ni con la dominación de una clase sobre otra. La ciudadanía, que se definió en un principio como pertenencia nacional, como fuente de derechos y deberes de individuos, como pertenencia colectiva a través de la pertenencia a una comunidad política, se ha ido ampliando y, hoy, ya se puede percibir una ética cívica global, no sin contradicciones.

Un ejemplo importante de las presiones de carácter internacional que han sido desvirtuadas al llegar al ámbito nacional y local es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). México lo suscribió y fue ratificado

por el Senado mexicano. En el contexto de la reclamación de las autonomías para los pueblos indígenas, el Convenio sirvió de base para los Acuerdos de San Andrés entre el Gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996. Sin embargo, el Gobierno no ha querido acatar esos acuerdos y, al negarse, ha incumplido su compromiso internacional. Por su parte, las comunidades indígenas han creado municipios autónomos en la zona zapatista. El Gobierno ha respondido con la fuerza para dismantelarlos y las comunidades han insistido en mantenerse; además, el ejemplo no se ha circunscrito a la región de influencia zapatista. Esto ha obligado a una reflexión en torno a las consecuencias de la participación social. Ha habido, en toda esta lucha, un aprendizaje.

Uno de los especialistas en indigenismo en México, Luis Villoro, ha destacado que los municipios autónomos que se crearon en 1997 y 1998 en Chiapas y en otras regiones pretenden devolver el poder, en el ámbito en que viven, a hombres y mujeres concretos, para que sean capaces de decidir libremente sobre sus formas de vivir y asociarse. El Gobierno ha denunciado que son ilegales. Villoro señala que lo son según las legislaciones estatales, porque la función de ese orden legal fue sustituir el poder directo del pueblo por el de un grupo que ha pretendido hablar en nombre del pueblo, pero sin consultarlo, y precisa que no son ilegales si se tiene en cuenta la Constitución. Porque, si los municipios autónomos son la creación de la mayoría de una comunidad, expresan una forma de democracia real, que devuelve el poder allí a donde actúan los hombres y las mujeres. Para Villoro, la represión contra los municipios autónomos es la destrucción de una forma privilegiada de democracia.

Surge una ciudadanía global

El dinamismo de una democracia cultural que apela a una filosofía moral ha llevado a la lucha por atenuar lo más posible las desigualdades económicas y sociales. Existe actualmente un principio ético de justicia que es compatible por personas de culturas diferentes que propician una lógica de reciprocidad. La igualdad no sólo es un principio, es un logro. Ciertamente, con el neoliberalismo se ha estado viviendo en un periodo regresivo, en donde se impone una globalización y se trata de imponer, en la base de la sociedad, la escasa capacidad de pensar tanto los problemas globales como los locales.

Surgen grandes paradojas como la que se observa cuando, desde los centros internacionales del poder, se alaba la globalización y se desterritorializa el capitalismo, a la par que se desecha la idea de humanidad. Existe una civilización tecno-industrial-burocrática que impone su lógica. No obstante, en núcleos de la base, ha ido creciendo el sentimiento de que es indispensable redefinir la vida en común, de que se tiene que saber vivir conjuntamente de una nueva forma, con una nueva organización del trabajo y de la vida. A esta convicción se le ha llamado elaboración de una política de civilización, y ya se habla de la existencia de una ciudadanía global.

Cada vez más conciencia

La democracia es la sociedad de los ciudadanos. No existe ciudadanía si no hay igualdad jurídica, si hay exclusión social. El concepto de ciudadanía, que se ha desarrolla-

do con diferentes significados a través de la práctica política, se ha vuelto central. Actualmente es constatable una nueva sociedad civil en formación. La era de la globalización es también la del auge de las identidades ciudadanas. Esta ciudadanía realiza una síntesis entre pertenencia y justicia. Por una parte, se plantea la urgencia de controlar el poder absoluto de los mercados y de los capitales financieros, de hacer pública y transparente la evaluación de los mercados financieros, de redefinir la finalidad y prioridades de la tecnología. Por otra parte, se ve la urgencia de generar desde la base una solidaridad que ya se percibe como necesariamente mundial. Existe una nueva sociedad civil que se opone al imperio de la economía globalizada y que opone el principio de la libertad y de la justicia a la pura racionalidad económica. Se trata de una sociedad más defensiva, y más ética que política.

Hay acciones contestatarias conducidas en nombre de la diversidad y la solidaridad. Se condenan los crímenes que van contra la dignidad. Se protegen los derechos de la libertad y la diversidad. Se defiende el derecho a la diferencia, a ser reconocido igual y diferente a la vez. Se exige el reconocimiento de la diversidad de esfuerzos para conjugar la identidad y la participación. Se están creando nuevos modos de poner en práctica la solidaridad y la ciudadanía social en la vida cotidiana. Hay pequeñas moléculas que se interconectan y se va creando una conciencia moral mundial. La sociedad humana va tomando conciencia de su existencia como comunidad mundial. Se va viendo como necesaria una política a nivel mundial para establecer sistemas de regulación que garanticen equilibrios e intercambios justos. Se pide un control democrático de las nuevas tecnologías. Contra la globalización excluyente y empobrecedora, surgen demandas sociales mundiales. Cada vez hay más conciencia de que no es tolerable el mundo como está, con todas sus injusticias, y de que hay que buscar remedios radicales. Se está produciendo una internacionalización de la cultura popular y son los migrantes los promotores de esta movilización.

Sin pluralismo no habrá salida

También hay tendencias que van en sentido opuesto de la globalización. Resurgen nacionalismos, regionalismos y racismos. No todo son flujos. Se reafirman identidades territoriales, regionales, étnicas, de religión, de género y personales. Hay procesos contradictorios entre la globalización tecno-económica y la especificidad creciente de las identidades. Hay que aprender a vivir juntos defendiendo, al mismo tiempo, la igualdad y la diferencia. Por el carácter universal y plural del mundo, y para que haya una gobernabilidad mundial, debe lograrse el reconocimiento de principios, la instauración de reglas e instituciones y el respeto a la creación cultural. No hay que perder de vista que los derechos humanos han sido una construcción histórica y que se han ido ampliando con las luchas sociales. Sin derechos reconocidos y protegidos no hay democracia ni paz, pues faltan las condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos tanto en las regiones como en el mundo.

No hay avance democrático sin el reconocimiento de la alteridad. La ciudadanía está estructuralmente ligada al reconocimiento del otro, es la cristalización de una serie de demandas referidas a la superación de toda forma de discriminación. Implica ser tenido en cuenta en las decisiones públicas. El punto de vista de la sociedad civil

incluye a todos los ciudadanos, al tiempo que se apela a normas comunes. Por eso los miembros de las sociedades modernas intentan cooperar unos con otros de manera equitativa y no violenta. Y aseguran libertades iguales a todos los ciudadanos sin considerar sus orígenes culturales, sus convicciones religiosas o sus proyectos de vida.

En el pluralismo es posible construir consensos. A pesar de que existan concepciones diversas, es factible un acuerdo político. Pero se deben completar los principios tradicionales de los derechos humanos con los derechos de las minorías. En un Estado multicultural —como son la mayoría de los Estados a finales del siglo XX— se deben salvaguardar tanto los derechos universales —asignados a los individuos independientemente de su pertenencia a un grupo— como los derechos diferenciados para los grupos de las minorías étnicas.

Los derechos de las minorías están limitados por los principios de la libertad individual, la democracia y la justicia social. Los derechos de autogobierno constituyen una delegación de poderes a las minorías a través de algún tipo de federalismo. Los derechos individuales y colectivos no se contraponen: hay una ciudadanía “diferenciada”. La globalización ha hecho que el mito del Estado culturalmente homogéneo sea irreal. La justicia entre grupos diferentes exige que a los miembros de grupos diferentes se les concedan derechos también distintos. La acomodación de las diferencias constituye la esencia de la verdadera igualdad y, para acomodarlas, son necesarios derechos específicos en función del grupo. Los recursos y las políticas esenciales para la supervivencia de las culturas de las minorías pueden ser infravalorados y esto crea una desigualdad que, si no se corrige, se convierte en una gran injusticia. Los derechos diferenciados en función del grupo pueden ayudar a corregir esas desventajas. Las protecciones externas aseguran que los miembros de una minoría tengan las mismas oportunidades de vivir y de trabajar en su propia cultura que los miembros de la mayoría.

No se puede desdeñar la diversidad cultural: es necesario combinar el derecho a la comunidad y los derechos individuales dentro de ella. En una sociedad que reconoce los derechos diferenciados en función del grupo, los miembros de determinados grupos se incorporan a la comunidad política no sólo en calidad de individuos sino también a través del grupo. Hay que admitir estas formas de ciudadanía diferenciada ya que la ciudadanía es algo menos homogéneo de lo que la teoría clásica suponía. Los derechos de representación de grupos desfavorecidos son reivindicaciones a favor de la inclusión.

Los derechos de las minorías

La ciudadanía no es simplemente un *status* legal sino también una identidad, una expresión de la propia pertenencia a una comunidad política. Es necesario incluir los derechos multiétnicos y de representación para acomodar a los grupos étnicos y a otros grupos desfavorecidos dentro de cada grupo nacional. Aducir que sólo se les puede tratar como individuos es pretender ocultar las injusticias étnicas. En esto hay que cuidar tanto que un grupo no domine a otro, como que un grupo no oprima a sus miembros. Se debe asegurar la igualdad entre los grupos y dentro de ellos. Los derechos de las minorías son fundamentales para el futuro del mundo.

La ciudadanía no es un listado de derechos y deberes enunciados en términos universalistas. Se debe integrar el universalismo y la ciudadanía con el reconocimiento de rasgos y vínculos específicos. Así, la ciudadanía puede considerarse como la titularidad de acceso a determinados bienes que tienen forma de derechos civiles, sociales y políticos. Este acceso siempre se ha logrado bajo la presión de luchas dirigidas a su logro y ampliación. El reto es grande: hay que reordenar la vida individual y colectiva y vincular la autonomía con la interdependencia. Hay que vivir conjuntamente con tolerancia.

El imperio de la antidemocracia

Actualmente, existe la pretensión de hacer creer que la globalización es un fenómeno natural e inevitable, ante el que no queda otra opción que aceptarlo rendidamente. El capitalismo tiene desde hace tiempo una dinámica globalizadora que, en la última etapa, dinamizada por la tercera revolución industrial, ha adquirido un ritmo acelerado. Los discursos de la globalización pertenecen al campo de la ideología y no al de la ciencia. Una alternativa a esa globalización empobrecedora requiere, antes que nada, una actitud crítica que desenmascare la propaganda del actual capitalismo neoliberal. Después, habrá que examinar la reorientación de inversiones, el diseño de políticas públicas, privilegiar lo productivo y poner límites a las expoliaciones especulativas.

El neoliberalismo ha proclamado, por una parte, la liberalización de la economía de toda intervención estatal; por otra, ha hecho intervenir los brazos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para someter a aquellos que se atreven a poner en duda o a contradecir sus directrices. El neoliberalismo ha combatido las conquistas sociales: existe una explotación creciente del trabajo, el sistema genera una gran cantidad de desempleados, los salarios reales van a la baja y los beneficios del capital al alza. Esto genera miseria. No cesa el saqueo de recursos de los países pobres, que tiene como beneficiarias a las elites financieras del Norte y del Sur. La gran burguesía financiera ha usurpado el poder de decisión que alguna vez perteneció a las naciones. Impera la antidemocracia de hecho.

Paradójicamente, el Banco Mundial pretende hacerse pasar como el protagonista en la lucha contra la pobreza, cuando es pieza clave del empobrecimiento mundial. El año de 1996 fue nombrado año internacional de la erradicación de la pobreza y se dio un plazo de diez años para cumplir con esta meta. No obstante, las transnacionales siguen imponiendo sus leyes. La globalización implica que cada día los pobres pueden serlo más, por las tácticas de los especuladores y por las medidas de reestructuración.

Los compromisos de los Gobiernos para atender la extrema pobreza —emanados de un cálculo político y no de una convicción humanitaria o de justicia— no pasan de medidas paliativas y de propaganda. El llamado “desarrollo sostenible” puesto en práctica desde las cúpulas sólo ha generado más concentración de la riqueza y del poder político. Las evaluaciones de los programas lucha contra la pobreza, realizados por sus mismos diseñadores, han arrojado resultados muy pobres. El neoliberalismo ha logrado dismantelar el Estado de bienestar, mientras que empuja a la constitución

de un Estado “niñera” para los ricos, que los protege e incluso los subvenciona. Se han encontrado fórmulas para que las deudas de los ricos sean trasladadas a fondos que pagan los contribuyentes.

Se requiere una oposición organizada que pueda controlar al capital financiero, y esto está mucho más allá de lo que puedan decir las urnas. Las diversas opciones políticas se encuentran encadenadas ante las verdaderas decisiones, que ya no se toman en los Parlamentos. Esto desprestigia la democracia. Las mayorías consideran que no funciona bien y los electores empiezan a hartarse. Se extiende la convicción de que se defienden los intereses de los elegidos y no los de los electores. Aumenta la manipulación de las reglas del juego electoral y mediático. Un Estado impotente para resolver las necesidades de las mayorías va produciendo indiferencia en los electores. Las clases populares se sienten derrotadas.

Las alternativas

Sin embargo, no todo está perdido. Una vez situado el hecho de que las causas de la pobreza están en el sistema económico, la búsqueda de alternativas debe pasar por la organización política. El neoliberalismo ha atentado contra el tejido social. La estructuración de los grupos sociales conscientes, para poder defenderse y presionar, es aún muy débil, pero eso no implica que no se pueda buscar la manera de resistir primero, y de emprender, una vez que vaya variando la correlación de fuerzas, una o varias iniciativas. La democratización como meta implica el control de la industria, del comercio, de la banca, un control ejercido por las personas desde la base. Esto es muy difícil, pero no imposible.

Los grupos financieros tienen un elevado sentido de clase y no han sido bloqueados por una oposición organizada, porque se ha hecho creer a las personas que eso no es posible. No obstante, ya hay núcleos que han puesto en cuestión ese dogma. Las respuestas ante ese poder se pueden ir entrelazando a través de los diversos movimientos sociales. Hoy son fuerzas minoritarias, pero están muy enraizadas en la vida cotidiana y pueden empezar a oponerse, en la práctica, a la pretendida fatalidad de las leyes económicas y humanizar el mundo social. Pueden aprovechar la globalización para tejer una internacional de resistencia al neoliberalismo. Esto sólo se logrará a través de un dinamismo de democratización desde la base, que vaya constituyendo una nueva ciudadanía.

La nueva ciudadanía tiende a revalorizar el principio del bien común, por el cual se defiende el derecho de todos a un acceso justo a la alimentación, a la vivienda, a la energía, a la educación, a la salud, al transporte, a la información, a la democracia. Los nuevos ciudadanos demandan una sociedad humana mundial más justa en lo social, más eficaz en lo económico, más democrática en lo político y más atenta al cuidado del medio ambiente. Se busca una economía sostenible alternativa a la que proponen los poderes constituidos, no destructora de bienes humanos y naturales. Están surgiendo tendencias en contra de la anomia, en contra del egoísmo y en contra de la irresponsabilidad. Se buscan nuevas formas de participación y se construyen redes alternativas, se intenta combinar participación y decisión, se busca un mundo regulado por los hombres y las mujeres, no por el mercado. A la globalización económica se

responde con una globalización ética. Persisten las reclamaciones para garantizar los mínimos comunes y la tarea mundial de acabar con la pobreza. Se quieren combinar las razones del desarrollo y las razones de las personas. Se va formando un *ethos* civil compartido. Se proclama la necesidad de reconocer el valor de la vida humana. Se plantean metas que vinculan la economía con otros objetivos: el derecho al trabajo, a la libertad, a la igualdad y, sobre todo, el derecho a la felicidad.

Cada día es más urgente la construcción de un proyecto humanista alternativo, donde la economía y el Estado estén en función de la humanidad y no al revés. La construcción de una política que reintegre lo humano como centro. La regeneración de una ciudadanía que nos haga sentir que la Tierra es una patria común. Para esto hay que tratar de inventar lo posible, aunque hoy nos parezca improbable.